

**Coalición del Sur sobre Cárceles y Prisiones, 1974-1990** por Lydia Pelot-Hobbs  
en *Rehaciendo el radicalismo (Remaking Radicalism)* (pp. 173-174)

En 1974, cuando los Estados Unidos se embarcó en el proyecto político que se conocería como encarcelamiento masivo, los activistas del mundo libre organizaron la Coalición Sureña sobre Cárceles y Prisiones (SCJP) para resistir el creciente uso de la criminalización y el encarcelamiento. La SCJP se constituyó como una organización regional, y en su momento de mayor esplendor, a principios de la década de 1980, tenía delegaciones en Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Maryland, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Entre 1974 y su desaparición en 1990, el SCJP se centró en cuatro cuestiones principales: reformar las condiciones de las prisiones y cárceles para garantizar los derechos de los encarcelados, detener la construcción de nuevas prisiones, abolir la pena capital y desarrollar alternativas al encarcelamiento.

Para alcanzar estos objetivos, la coalición empleó una serie de tácticas. Por ejemplo, como parte de su activismo para reformar las condiciones de las cárceles y los centros penitenciarios, presentó demandas civiles y apoyó las huelgas de personas encarceladas y otras formas de resistencia, como la lucha del Sindicato de Presos de Carolina del Norte por su reconocimiento oficial como sindicato. El SCJP entendía que sus miembros eran tanto amigos y familiares de personas encarceladas como radicales y progresistas sin relación directa con el sistema penitenciario, pero cuya política les hacía simpatizar con los objetivos del SCJP de contrarrestar el castigo estatal con la justicia social. Estableció grupos de apoyo de familiares y amigos de personas encarceladas, coordinó viajes compartidos para visitar las cárceles y solicitó a los gobernadores reformas penitenciarias. A través de boletines y conferencias, sus miembros se esforzaron por informar y movilizar a la gente en torno a las formas cotidianas y extraordinarias de la violencia carcelaria, desde la atención sanitaria inadecuada hasta el aislamiento y las palizas de los guardias. El SCJP trabajó en alianza con organizaciones jurídicas como la ACLU y el Comité de Defensa de los Prisioneros del Sur (Southern Prisoners Defense Committee), así como con grupos religiosos liberales, en demandas relativas a las condiciones de las prisiones y en la defensa de la eliminación de la pena de muerte. El grupo se entendía a sí mismo como una rama regional de un movimiento nacional contra el encarcelamiento y se vinculó con organizaciones

como el Proyecto de Moratoria Penitenciaria Nacional (National Prison Moratorium Project) y Stop the Olympic Prison en Lake Placid, Nueva York.

El SCJP se organizó desde el punto de vista de que el “Nuevo Sur” posterior a los derechos civiles no era una sociedad transformada—como afirmaban muchos élites sureños—sino que estaba llevando a la nación a reforzar el racismo y la opresión de clase mediante la expansión del sistema penal y el resurgimiento de la pena de muerte. En su análisis, el crecimiento del encarcelamiento sirvió para almacenar a los sureños pobres y de clase trabajadora que, de otro modo, la sociedad había abandonado. Un folleto del SCJP describía la pena capital como “el medio definitivo para deshacerse de la gente con la que ya no sabemos cómo abordar”.

Aunque se auto-identificaba como una organización de reforma penal, las demandas del SCJP mezclaban políticas reformistas y radicales en sus peticiones de libertad provisional, programas alternativos de remisión y el cese total de la construcción de nuevas prisiones. Sus campañas se enfrentaron al reto de fomentar inadvertidamente proyectos de construcción estatal punitiva. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, la sección de Luisiana presentó una serie de demandas contra las condiciones inhumanas generalizadas y la muerte prematura en el sistema penitenciario de Luisiana. Sin embargo, el gobierno estatal, en consonancia con los sheriffs locales, respondió a las demandas ampliando el sistema penitenciario en lugar de ampliar los mecanismos de liberación. En respuesta, la sección de Luisiana se retiró de los litigios sobre las condiciones de las cárceles como estrategia de descarceración.

A medida que se consolidaba la política de mano dura contra la “delincuencia” en la década de 1980, las campañas del SCJP se centraron menos en el encarcelamiento y más en acabar con la pena de muerte, que estaba especialmente extendida en el Sur. La coalición se opuso a la pena de muerte tanto a nivel político como mediante la celebración de protestas y vigiliass; desafiaron el asesinato por parte del estado de John Louis Evans en Alabama, ejecutade en 1983, y protestaron por la ejecución prevista de Shabaka Sundiata Waglini de Florida, que fue liberade del corredor de la muerte en 1987 y excarcelade en 1990. Aunque sus estrategias cambiaron, el SCJP nunca abandonó su postura de que “si hubiera

que elegir entre las prisiones tal y como son ahora y la ausencia de prisiones, elegiríamos rápidamente lo segundo”.